

III. *Declaración sobre el formulario N° 130 de la Dirección General Impositiva.*

La Asociación consideró como una extralimitación fiscal la exigencia de información complementaria solicitada a través del formulario 130 de los contribuyentes del impuesto a los réditos, y en tal sentido dio una declaración que se hizo pública a través de la prensa el 19 de abril de 1965, cuyo texto es el siguiente:

“Con motivo del próximo vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y el pago de impuesto a los réditos por el año 1964, los contribuyentes son obligados a acompañar, como rubro 7 del formulario 130, lo que se denomina ‘Información complementaria’, mediante la cual se exigen datos sobre: a) alquiler abonado por casa habitación; b) gastos de veraneo y recreo en el país; c) gastos por viajes realizados al exterior; d) gastos para la educación de los hijos y demás personas a cargo; e) gastos de servicio doméstico; f) refacciones en propiedades; g) pintura de casa habitación. Asimismo, se exige información sobre lo invertido en alhajas, muebles, alfombras, enseres, aparatos filmadores, televisores, aire acondicionado, etc., pieles. Por último, se reclama del contribuyente indique el año de adquisición y valor de costo de bienes que no figuren a nombre de la persona a quien se refiere la declaración jurada.

“Frente a estas innovaciones, corresponde recalcar —ante todo—, el modo en absoluto anómalo en que se ha agregado esta parte de la declaración jurada sobre impuesto a los réditos, pues ninguna disposición reglamentaria ni del órgano de aplicación —la Dirección General Impositiva— procedió a su implantación. No puede sostenerse que basta con fundarla en la cláusula del artículo 21 de la ley 11.683 —en cuanto habla de la ‘forma y plazos’ de las declaraciones juradas—, por cuanto aun cuando fuese así, habría sido menester ponerla en práctica mediante una resolución especial para el caso.

“Ello entraña una grave transgresión, por cuanto la actividad de percepción y fiscalización de los tributos está regulada por normas jurídicas escritas, cuya publicidad y conocimiento previo

a la aplicación son sustanciales. Entre nosotros, esas normas emanan, principalmente, de la ley 11.683, antes citada, llamada de procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos, de la reglamentación consecuente y de disposiciones dictadas por la Dirección General Impositiva.

"Felizmente, desde bastante tiempo atrás ha quedado superada la discrecionalidad y el arbitrio administrativos que—inopinadamente y como sistema— permitieran, sin base legal, imponer obligaciones a los contribuyentes. La forma como se exige esta 'Información complementaria' significa dar un lamentable paso atrás en tal sentido.

"Por lo demás, como queda arriba esbozado, las normas jurídicas escritas resultan vigentes para lo futuro, es decir, respecto de relaciones y situaciones jurídicas en relación con las cuales no se haya producido el hecho consumado que impida reconstruirlas, así sea en su base documental. Pues en el presente caso precisamente ocurre que, en el mes de abril de 1965, el fisco pretende que los contribuyentes informen sobre gastos e inversiones—todos de índole particular, personal, que no afectan a la obtención, mantenimiento y conservación del rédito— que hubieran hecho en el curso del año 1964, en una época en que no sabían que un año después les sería exigida tal información.

"Para defender esta tesitura, no se puede argüir sobre la base del artículo 40 de la ley 11.683, en cuanto ordena que los contribuyentes deben conservar sus documentos y comprobantes por diez años, y excepcionalmente por un plazo mayor, 'cuando se refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible'. Es fácil, pues, interpretar esta disposición legal, que tiene un fin específico, cual es el de servir a la determinación de oficio de la obligación impositiva sobre base cierta. Precisamente ocurre que toda la información del rubro 7 comentado se vincula con el supuesto en que se pretenda determinar la obligación impositiva sobre base presuntiva, que es una solución especialmente aplicable cuando no existen elementos documentales directamente relacionados con la actividad del contribuyente, realizada para obtener, mantener y conservar

el rédito. En consecuencia tampoco es apto ese fundamento.

"Ha de tenerse presente que, en tal sentido, resulta por implicancia de la declaración jurada del impuesto a los réditos —sin el agregado de este rubro 7—, el monto total que en el año contribuyente haya destinado a gastar. Y ello a través de su manifestación sobre bienes y deudas, que debe acompañar al cuplimentar el formulario 120.

"Como la formación del patrimonio de las personas no puede provenir sino de la acumulación de ingresos de uno u otro origen —sean réditos o ganancias de capital—, en cuanto dicho patrimonio no aumenta o disminuye en la medida de los ingresos o de los quebrantos obtenidos, la diferencia, necesariamente, habrá sido afectada al gasto. Sobre ese particular, para el evento de distorsiones o incongruencias entre la declaración de la materia imponible y la del patrimonio, el artículo 25 de la ley 11.683 provee al Estado del instrumento jurídico apto y suficiente para la más amplia actividad fiscalizadora, cuando dispone que 'se considerarán asimismo como réditos del ejercicio fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo origen no pruebe el interesado'.

"En conclusión: la Asociación Argentina de Derecho Fiscal entiende que la 'Información complementaria', exigida como rubro 7 del formulario 130, en ocasión de presentar los contribuyentes sus declaraciones juradas por el impuesto a los réditos del año 1964, significa:

"a) Excederse en el ejercicio de las facultades otorgadas a la Dirección General Impositiva, por cuanto no está fundada en norma legal ni reglamentaria alguna.

"b) Exigir datos que no llevan a la determinación cierta de la materia imponible —y del consiguiente impuesto—, sino a la determinación sobre base presuntiva, lo que no es aplicable a todos los contribuyentes, sino solamente a algunos de conformidad con el régimen tributario vigente.

"c) Exigir información innecesariamente superflua, que no guarda relación con lo erogado por el contribuyente para obtener, mantener y conservar el rédito.

"A todo ello ha de agregarse, por último, la gravedad mayor que asume todo este problema, ante la derogación del prin-

cipio del secreto fiscal, dispuesta recientemente por la ley 16.656, desde el 1º de enero del año en curso.

"Buenos Aires, abril de 1965. — Doctor Adolfo Atchabahian. Presidente."

IV. Reuniones en mesas redondas.

Con el objeto de analizar y debatir públicamente distintos temas de carácter impositivo se organizaron mesas redondas en cumplimiento del plan de labor expuesto en la última Asamblea General. En tal sentido fueron invitados todos los miembros de la Asociación para que propusieran temas e intervinieran en los debates de los mismos.

De los temas propuestos se seleccionaron los siguientes: "Cuestiones atinentes a los recargos previstos por el artículo 42 de la ley 11.683 (t. o. en 1960), modificado por la ley 16.450"; "El impuesto a las actividades lucrativas en el comercio internacional y en el interprovincial, y las tasas de inspección municipales, al comercio y la industria"; "Nuestra legislación tributaria y la inflación" y "Deberes, obligaciones y sanciones de los agentes de retención".

Cada uno de ellos dio motivo a intensos debates que se llevaron a cabo en la Biblioteca del Colegio de Abogados durante los meses de junio a octubre de 1965, y cuyo texto se publica en el anexo de esta memoria.

V. La Asociación iniciará trámite para ser reconocida como entidad de beneficio público.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la personería jurídica, la Asociación iniciará los trámites correspondientes ante la Dirección General Impositiva a los efectos de ser reconocida como entidad de beneficio público.

VI. Incorporación de nuevos miembros activos y adherentes.

Han sido nombrados miembros activos los siguientes profesionales: Miguel Tesón Paladino, Luis Severiano Serrano, Víctor B. Durand y Tito Leopoldo Rocchetti Pastorutti. Asimismo ha